



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT/0160/2017

FECHA: 13 de octubre de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0160/2017 presentada por [REDACTED], en representación de la *Plataforma en Defensa del Hospital Provincial de San Sebastián*, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

I.ANTECEDENTES

1. Los hechos que han dado lugar a la presente reclamación pueden sistematizarse como sigue:
 - Mediante escrito registrado en el Ayuntamiento de Badajoz el 21 de diciembre de 2016, al amparo de lo previsto en los artículos 3.1 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y en el artículo 8 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, el ahora reclamante presentó una denuncia urbanística ante la indicada Corporación municipal. En concreto, los hechos denunciados consistían en que el anterior 16 de diciembre de 2016 los miembros de la plataforma habían sido advertidos de la realización de obras sin licencia en el edificio del Hospital Provincial de San Sebastián, consistentes en tareas de prospección arqueológica. De este modo, continúa el escrito de denuncia, y dado que es preceptivo el control arqueológico en este tipo de trabajos y la obligatoriedad de tener licencia de obra ya que el edificio se halla protegido, se dirigieron a la Dirección General de

ctbg@consejodetransparencia.es



Patrimonio de la Junta de Extremadura y al Servicio de control y disciplina urbanística municipal solicitando el Informe del arquitecto Jefe del servicio de control y disciplina urbanística sobre estas obras ejecutadas por la Diputación de Badajoz, presentado denuncia ante el Ayuntamiento de Badajoz y exigiendo que se contestase por escrito a la misma.

- Al no haber obtenido contestación mediante escrito registrado en este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el 23 de mayo de 2017, el interesado interpone una reclamación ante esta Institución sin invocar en ningún momento la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG-.
2. El 24 de mayo de 2017, por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo, se dio traslado del expediente a la Secretaría General de Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a fin de que, en el plazo de quince días, por el órgano competente se formularan las alegaciones que estimasen por conveniente aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que se pudiesen plantear.

Mediante un oficio del Jefe de la Sección de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Badajoz registrado en este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el 20 de julio de 2017, se traslada informe en el que, en breve síntesis, se formulan las siguientes alegaciones en el expediente de referencia:

- El 21 de diciembre de 2016, [REDACTED] en representación de la PLATAFORMA EN DEFENSA DE L HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN SEBASTIÁN registró una denuncia, solicitando de esta Administración local la emisión de informe escrito por el Arquitecto Jefe del Servicio de Control y Disciplina Urbanística sobre las obras ejecutadas por la Diputación de Badajoz en el edificio del Hospital provincial.
- El 23 de diciembre de 2016, por los técnicos de la sección de Vigilancia e Inspección Urbanística se emitió informe para la apertura de expedientes por obras clandestinas, considerándose promotor de las mismas a la Excm. Diputación Provincial de Badajoz (propietaria del inmueble) y empresa contratista la mercantil ELABOREX S.L. En cualquier caso las obras realizadas resultan legalizables si bien para la concesión de la licencia urbanística se requiere dictamen vinculante de la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura, así como el seguimiento arqueológico de las obras.
- El 17 de mayo de 2017 el Alcalde acordó incoar procedimiento de restauración del orden urbanístico iniciándose con ello el expediente de protección de la legalidad LEG 5/16/ZONA 1. En igual fecha se inició el expediente sancionador SAN 5/16/ZONA 1, frente a la Diputación de Badajoz y la mercantil ELABOREX S.L por la realización de obras clandestinas, encontrándose ambos expedientes en tramitación.
- Del acuerdo de incoación del expediente de protección de la legalidad LEG 5/16/ZONA 1 se dio traslado de oficio a la PLATAFORMA EN DEFENSA DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE SAN SEBASTIÁN a través de su representante,





[REDACTED], el 30 de mayo de 2017 en su condición de denunciante de los hechos. Este expediente tiene por finalidad la restitución de la legalidad urbanística vulnerada con la ejecución de obras clandestinas lo que puede satisfacerse a través de su legalización o mediante restitución de la realidad física alterada dependiendo de si las obras clandestinas realizadas resultan o no legalizables. En el presente caso las obras fueron consideradas por los técnicos municipales a priori legalizables, por lo que en la resolución de 17 de mayo de 2017 se acordó requerir a la Diputación provincial -propietaria de la finca- para que en el plazo de dos meses instara su legalización (conforme establece el artículo 193.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura). Igualmente se acordó suspender el plazo de resolución del procedimiento hasta el dictado de resolución en el expediente de legalización tramitado a solicitud del interesado o hasta el transcurso del plazo otorgado sin haberse presentado tal solicitud.

- La legalización se encuentra actualmente en trámite, pendiente de la autorización de las obras que preceptivamente debe emitir la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural y que fue requerida el 4 de enero de 2017.
- La Plataforma no ha realizado a día de hoy solicitud alguna de personación en el procedimiento administrativo LEG 5/16/ZONA 1, acreditando su condición de asociación u organización representativa de intereses económicos y sociales y reclamando su consideración como interesado en el procedimiento como titular de un interés legítimo colectivo.
- El derecho de acceso de los ciudadanos a los informes y demás actuaciones que obren en expedientes administrativos finalizados no puede confundirse con el derecho a imponer a las Administraciones públicas, en procedimientos incoados de oficio o que se encuentren en tramitación (como sucede en el caso que nos ocupa), la elaboración de esos informes decidiendo incluso la autoridad o funcionario público que tiene que emitirlos.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno - desde ahora, LTAIBG-, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas*





atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley". Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

"1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias".

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Junta de Extremadura (Consejería de Hacienda y Administración Pública) han suscrito un Convenio para el traslado a este Consejo del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 de la LTAIBG en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en sector público autonómico o local.

3. Precisadas las reglas de naturaleza orgánica para dictar la presente Resolución, la primera cuestión en la que debemos centrar nuestra atención consiste en precisar cuál es el objeto de la originaria solicitud que ha motivado la misma. Si nos atenemos al tenor literal del escrito remitido por el ahora reclamante a la Sección de Disciplina Urbanística del Servicio de Control y Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Badajoz, el concreto objeto de la solicitud consiste en una petición de elaboración de un informe del arquitecto jefe del servicio de control y disciplina urbanística como consecuencia de la denuncia formulada por el propio reclamante.

Delimitado en los términos anteriores el objeto de la pretensión, resulta necesario recordar que, según se contempla en el preámbulo de la LTAIBG, ésta tiene por finalidad "ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento". A este fin, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la "información pública" en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma.





Por su parte, el artículo 13 de la LTAIBG define la “información pública” como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

En último término, el artículo 24.1 de la LTAIBG prevé, como mecanismo de garantía del ejercicio del derecho y medio de impugnación en los procedimientos de acceso a la información pública, la presentación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de una reclamación frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

4. De acuerdo con los preceptos de la LTAIBG reseñados en el anterior Fundamento Jurídico, y teniendo en cuenta el objeto que motiva la pretensión de la presente Reclamación, cabe concluir que la misma queda fuera del ámbito de aplicación de la citada LTAIBG. En efecto, tal y como se deduce de la reseña sumaria de los antecedentes de hecho reflejada más arriba, no hay una solicitud de acceso a la información pública, entendida ésta en los términos del artículo 13 de la LTAIBG. Por el contrario, el objeto de la pretensión del ahora reclamante es la elaboración por un órgano unipersonal de la administración municipal de un informe sobre una denuncia urbanística planteada por el mismo. Esto, como fácilmente puede apreciarse, queda al margen de la LTAIBG pues no se está formulando una solicitud de acceso a una información que existe en el momento de plantear dicha solicitud, sino que, por el contrario, se está solicitando que la administración municipal lleve a cabo una actuación material sobre un determinado sector del ordenamiento.

Procede, en suma, desestimar la Reclamación planteada al considerar que su objeto no puede calificarse como “información pública” a los efectos del artículo 13 de la LTAIBG.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **DESESTIMAR** la Reclamación presentada por [REDACTED] por cuanto su objeto no puede considerarse información pública de acuerdo con lo definido en el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de





la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Esther Arizmendi Gutiérrez

